

Talca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

VISTO:

En causa RIT N°293-2021, seguida ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, el Defensor Particular don Patricio Agustín Ramírez Méndez, en representación de Adolfo Segundo Salinas Campos, interpuso recurso de nulidad en contra de la sentencia definitiva de 26 de septiembre 2022, que condenó a su defendido en calidad de autor del delito consumado de robo con intimidación y violencia, en las personas de Mario Vergara Osses y José Ignacio Rivera Espinoza de especies de propiedad de éstos y de la Empresa Bat Chile, cometido el 26 de marzo de 2019, en la comuna de Nancagua, a sufrir la pena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo y a las sanciones accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Fundamenta su recurso en la causal prevista en el artículo 374 letra e), en relación con lo dispuesto en los artículos 342 y 297 del Código Procesal Penal; en subsidio de la anterior, adujo la misma causal del artículo 374 letra e) del citado código. Concluyó solicitando tener por interpuesto recurso de nulidad, que sea acogido y se declare que:

“1.- Se acoja el presente recurso de nulidad en mérito de la causal principal del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, y que conforme a lo establecido en el artículo 386 del Código Procesal Penal, de acogerse la misma, se anule el juicio oral y la sentencia, señalándose el estado en que debe quedar el proceso, y ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado.

2.- En subsidio de la causal anterior, se acoja el presente recurso de nulidad en mérito de la causal subsidiaria invocada del artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal, y que conforme a lo establecido en el artículo 386 del Código Procesal Penal, de acogerse la misma, se anule el juicio oral y la sentencia, señalándose el estado en que debe quedar el proceso, y ordenando la realización de un nuevo juicio oral ante un tribunal no inhabilitado”.

Por resolución de 28 de octubre de 2022, se declaró admisible el recurso, procediéndose a su vista el día 8 de noviembre en curso.



OÍDOS LOS INTERVINIENTES Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en lo concerniente a la causal deducida de manera principal, esto es, la consagrada en la letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, indicó que la sentencia omitió los requisitos previstos en la letra c) del artículo 342, en relación al artículo 297 del mismo cuerpo legal, verificándose en concreto una infracción al principio de razón suficiente e imposibilidad en la reproducción del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones a las que arribó la sentencia.

Considera que el tribunal ha vulnerado el principio de la lógica de la razón suficiente, ya que no ha tomado en cuenta la totalidad de la prueba rendida, omitiendo de pronunciarse sobre puntos que dejó en evidencia la defensa y que dan cuenta de su teoría alternativa referente a la falta de participación. No contando así, la decisión condenatoria de suficiente fundamento. Añade que este principio ha sido definido por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de fecha 10 de septiembre de 2015, causa Rol 1893–2015, además, la filosofía lo define como aquel principio en virtud del cual “lo que ocurre tiene una razón suficiente para ser así y no de otra manera” (Pruss, Alexander R., 2006, *The Principle of Sufficient Reason: A Reassessment*, Cambridge University Press, p. 467). En el ámbito de la lógica jurídica, ha sido comprendido como “aquel en virtud del cual toda norma o deducción jurídica, para ser válida, necesita de un fundamento suficiente de validez” (Fernández, Jesús, 1991, *La filosofía jurídica de Eduardo García Maynez*, Universidad de Oviedo, pp. 130–131).

Precisa que los hechos que configuran la causal invocada emanan del resultado que produce una reproducción incompleta y acomodaticia de la prueba producida en el juicio, como también de la inadecuada e injustificada valoración de la prueba, la que incluso fue sopesada parcialmente por los sentenciadores. Asimismo, sostiene que la valoración de la prueba contraría los principios de la lógica, debido a que las conclusiones arribadas en la misma son fruto de una inexacta reproducción de los dichos de los testigos, vulnerando el principio de razón suficiente atribuyéndole participación a su representado como autor del delito de robo con intimidación y violencia, en grado de consumado, previsto y sancionado en los artículos 432 y 436 inciso primero, en relación con el 439, todos del Código Penal, sin existir prueba suficiente que acredite tal participación.

Este principio rector de la Lógica Jurídica de razón suficiente, afirma que todo juicio para ser verdadero ha menester de una razón suficiente, el sentido de los principios lógicos consiste en hacer enunciaciones sobre la



verdad o falsedad. En esta proposición teórica, cabe fundar la regla pedagógica según la cual no debemos admitir, sin razón suficiente, la verdad de una afirmación. Esta razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado, por consiguiente, cuando no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente válido, descartando con ello, la existencia de teorías alternativas al caso. La razón es insuficiente cuando no basta por sí sola para abonar lo enunciado en el juicio, sino que necesita ser complementada con algo para que este sea verdadero. El principio jurídico de razón suficiente no es una mera aplicación en el campo del derecho, pues alude a juicios y normas que permiten afirmar o negar su validez o invalidez.

Esgrime que, en la especie, el principio lógico de razón suficiente se infringió en dos sentidos: por prueba insuficiente para arribar a la que conclusión que adopta el tribunal; y por infracción al principio de la corroboración.

Manifiesta que en el presente juicio, los sentenciadores han tenido por acreditada la participación en los hechos acusados, descartando así la tesis absolutoria de la defensa que sostuvo la falta de participación del acusado respecto al supuesto fáctico que sustentaba la pretensión punitiva del persecutor. En este orden de ideas, lo relevante durante el juicio era analizar la eventual participación del encartado en los hechos imputados por el Ministerio Público a la luz de la prueba vertida durante el desarrollo del Juicio Oral; y, de la prueba rendida, no es posible atribuir más allá de toda duda razonable, la participación de su representado en los hechos acusados, finalmente asignada por los miembros de Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, ya que la resolución impugnada no reproduce ni contiene de forma completa los relatos de los testigos, como tampoco, de la prueba documental y material acompañada por el persecutor y la defensa, sino que solo se fundamentó en pasajes favorables a la tesis condenatoria descartando aquella información que sustentaba la inocencia de su representado.

Al efecto, reproduce el considerando decimonoveno, indicando que la prueba indiciaria ofrecida, como se señaló durante todo el juicio oral, a diferencia del razonamiento de los sentenciadores solo es la corroboración de los dichos de su representado. La interpretación que da el tribunal, es acomodaticia a la teoría señalada por el ministerio público, toda vez que el solo posicionamiento observado a través de las cámaras no permite dar la certeza de la participación o coordinación que, además, es descartada al no aplicar la agravante de la actuación en banda. En tal sentido, no es necesario que Adolfo Salinas conozca la planificación o sea parte del ilícito por el



posicionamiento señalado en las cámaras, y bien podría haber sido dirigido por el copiloto quien, como se señaló, estuvo en todo momento con su representado, hecho que no fue indagado, a conveniencia de la teoría de la fiscalía, por lo que no se apreció la prueba en el sentido de desvirtuar la participación sino que se interpreta, presumiendo la activa participación de su representado, en contra del principio de inocencia, pro reo y de las máximas de la lógica y la razón.

De otro lado, indica que las fotografías acompañadas no pueden ser elementos de peso, que convenzan más allá de toda duda razonable de la participación como autor de su representado, sólo posicionan al vehículo conducido por don Adolfo Salinas, pero dichas imágenes no son claras en cuanto a ver u observar al copiloto, que es quien dirige el actuar de su representado, por tanto, estas fotografías sólo nos dan indicios, que son acordes a los estándares de prueba necesarios para dictar una sentencia tan gravosa como la que pesa sobre su representado.

En cuanto a los pasos por pódicos de peaje señala que, al igual que los elementos de prueba anteriores, estos pasos por los pódicos y su consecuente fotografía, en ningún caso pueden ser elementos de peso, que convenzan más allá de toda duda razonable de la participación como autor de su representado, sólo lo posicionan junto a un copiloto, que no fue habido por el ministerio público y que es quien contrata y compele a don Adolfo Salinas a moverse, estacionarse o escoltar a la caravana de vehículos y es quien si se coordinó con el resto de los participantes.

Respecto del tráfico de llamadas, estima este punto como el más relevante, toda vez que es imposible condenar más allá de toda duda razonable y esgrimir como elemento de convicción el tráfico de llamadas de su representado, las que no se acompañan en la prueba rendida y que fortalecen aún más su teoría sobre la calidad de mero transportador, quien jamás se comunicó de forma previa con el resto de los participantes, ni durante todo el desarrollo del ilícito y tampoco posteriormente, por lo que no debió ser considerado como elemento probatorio

En cuanto a las conexiones a antenas telefónicas indica que es prueba indiciaria, que sólo posiciona pero no da ni convicción ni menos claridad de cuál es el grado de participación en el delito; además, señala que dichas pruebas son, tal como reconoce el inspector Soto, un trabajo de carácter “artesanal” que nos da meras referencias y son entregadas por compañías privadas y no por entes como la Superintendencia de Telecomunicaciones.

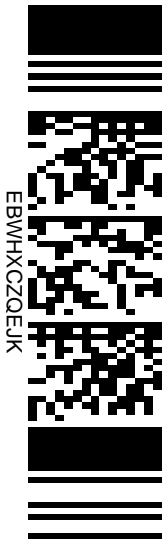
Respecto de la planificación, aduce que en el razonamiento



decimonoveno, se hace evidente la insuficiencia de la prueba vertida en juicio y la imposibilidad racional de arribar a un veredicto condenatorio en base a aquella toda vez que, existiendo multiplicidad de posibles autores, es necesario determinar la participación exacta de cada uno de ellos, siendo relevante en la especie los elementos del tipo penal que impone penas gravosas. Esto es más relevante aún, al considerar que no actúan en banda, según el razonamiento del tribunal y cada uno de ellos pudo haber o no realizado tales o cuales hechos, lo que a la luz de la sentencia y la prueba rendida parece totalmente plausible, pero evitan los sentenciadores en su argumento, indagar sobre el grado de participación de los acusados, que realizó cada uno y si, en el caso de su representado, sólo transportó a quienes cometieron el ilícito, si fue o no compelido a seguir a la caravana descrita en los hechos, o la determinación exacta de cometido por otras personas involucradas en el hecho punible.

Resulta relevante que el tribunal omita análisis de lo alegado e interrogado por la defensa en cuanto a determinar claramente la organización, de la cual su representado jamás fue parte y dicha labor probatoria no fue realizada por el ministerio público, sólo infiere coordinación de manera posterior a la comisión del ilícito. Esta debilidad probatoria del Ministerio Público fue confirmada por los funcionarios policiales al señalar que no encontraron al “chino” quien es uno de los coordinadores y no hay interceptaciones de él, previas o posteriores, al igual que con el resto de los presuntos implicados.

Hace presente que, no obstante la prueba ofrecida y que fundamenta según este Tribunal la participación punible de su representado, no se logra encontrar cigarros en su poder, ni las pertenencias o dinero sustraídas a los tripulantes del camión de BAT Chile, esto a raíz de que dicho ilícito es cometido por personas diversas, que no fueron identificadas por el ministerio público, en un lugar totalmente alejado de donde iba la caravana y dicho acto se le imputa a su representado, quien no sabía y no tenía porqué saber de dicha comisión, comunicando de forma acomodaticia el dolo de dicho acto a su representado, sin ningún razonamiento lógico. Esta insuficiencia referente a la participación, también se puede abordar como en la infracción al principio de la corroboración ya que, en definitiva, no se dan características físicas y de vestuario entregadas por algún testigo, jamás iban a ser corroboradas por otros medios de prueba en el curso del juicio. El Tribunal desestimó lo que señalan las propias víctimas en torno a que no pudieron reconocer a los acusados. Lo anterior unido al indubitable hecho, que consta en la sentencia y



en audios que, por parte del Ministerio Público, no se le hizo el habitual ejercicio de reconocimiento al menos en la contextura física respecto de alguno de los acusado durante el transcurso del juicio, esto producto de la excepcional modalidad implementada para llevarlo a cabo, de videoconferencia. El Tribunal no explica la razón lógica para desestimar otras tesis y omite cualquier análisis respecto del hecho que el imputado hubiese sido compelido, contratado para una carrera o dirigido por el copiloto durante el curso del juicio ni en la diligencia investigativa previa y es esta fundamental circunstancia, que el tribunal opta por omitir cualquier análisis, constituyéndose en una insuficiencia probatoria no superada. Añade que, normalmente, en un juicio donde el acusado no es reconocido por las víctimas, resulta con un veredicto absolutorio. A contrario sensu, cuando se les reconoce, no obstante cualquier teoría alternativa esbozada, se dicta veredicto condenatorio. En el caso de marras no se verificó aquello. Las víctimas tampoco, en ningún momento trataron de sindicar o señalar que la persona que estaba en juicio, a través de la reunión de la aplicación ZOOM, había sido quien ejerció la fuerza o amenaza. Lo cual consta de la transcripción de su declaración. Es erróneo que podamos deducir lógicamente, que una persona participó de un delito, si afirmamos como hipótesis la circunstancia de que jamás fue sindicado por la víctima de aquél.

Asimismo, la sentencia no se hace cargo del hecho que los testigos y víctimas señalan que no hubo violencia o fuerza en el camión propiedad de BAT Chile, parte querellante en esta causa que no prosigue con su actor en el juicio oral, toda vez el delito en si jamás se consumó, sino que uno diverso, que no le empece a su representado y al cual se le comunica el dolo, contrariando los principios ya señalados, inocencia, pro reo o corroboración, ergo, no pueden ser la base de una sentencia condenatoria.

Existe, además, insuficiencia en señalar la dinámica de la comisión del ilícito, pues ningún testigo lo consigna, no hay características físicas entregadas por las víctimas o algún testigo, que merecía ser objeto de un razonamiento más acabado para entender porque concluían que era su representado quien amenaza, se apropia o fuerza el camión ya señalado o sobre las víctimas, más aun teniendo en cuenta los estándares exigidos en la instancia procesal que nos encontrábamos. Otro punto no menor, al verse dañado el principio de inmediación por la excepcional modalidad de la video conferencia, es que se hizo imposible que el tribunal pudiese cotejar la capacidad física aproximada de su representado, para contrastarlo con la descripción de la altura de quienes amenazan u ejercen fuerza sobre las



víctimas. Lo anterior, la sentencia lo tiene insuficientemente superado, se considera lo adverso más que la totalidad de su declaración y, por otro lado, la baja calidad de la prueba acompañada (fotografías y videos del camión) no permite un argumento de la defensa y, en contra de los principios pro reo y los que dan forma a nuestro sistema procesal penal, se pondera de manera que perjudica a su representado.

Finalmente, esgrime que reuniéndose las dos formas en que fue vulnerada la razón suficiente (prueba insuficiente e infracción principio de corroboración), lo encontramos respecto de lo aseverado por el tribunal sustentado en las declaraciones testimoniales tendientes a afirmar que el imputado era quien detentaba la posesión de especies, se evidencia nuevamente una insuficiencia probatoria, ya que esa prueba no se basta por sí sola e infringe el principio de la corroboración (también tratado en la segunda parte de esta causal), en los siguientes términos: No se valora un hecho que sin lugar a dudas respaldaba la tesis de la defensa y siendo un hecho evidenciado durante el juicio, da cuenta de la falta de corroboración de la prueba tendiente a acreditar que las especies estaban en posesión del imputado, lo cual podemos establecer como un hecho cierto, pero no corroborado con otro medio de prueba en pos de determinar la circunstancia fundamental cuestionada, que era la participación del imputado en delito que se le imputa.

El juicio no se trataba de dilucidar si el imputado estaba en el lugar de los hechos, sino de determinar si su actuar se enmarca dentro del tipo penal en cuestión, situación que jamás se realiza. La insuficiencia y falta de corroboración en este acápite se centra en el hecho que las víctimas y testigos que participan del juicio, jamás vieron a su representado, sustrayendo especies, amenazando, ejerciendo fuerza contra las personas y las cosas, ya sea apuntando a las víctimas con un arma, revisando y sustrayendo sus pertenencias, planificando o repartiendo parte del botín, ni menos conduciendo el camión sustraído. Nos cuestionamos si era plausible superar la interrogante de que lo que realizó su representado fue solo ser el transporte, ignorando cual era la finalidad del viaje, más aun considerando lo que cobró por el flete y que terceros desconocidos, por lo que estima que la prueba ofrecida es insuficiente para que este tribunal pueda arribar, más allá de toda duda razonable, a la certeza que su representado participara del hecho por el cual se le acusa. Claramente quedó establecido que estaba en Nancagua, pero no que haya participado activamente del ilícito y si fue usado como un mero transporte, compelido por el resto de los participantes. Ahí es donde falta la



corroboración a las declaraciones de los testigos y víctimas respecto a ese único antecedente, que era estar en posesión de especies y que finalmente no fue sustentado con una prueba autónoma material que aclarara la participación, que hubiese sido que el imputado llevara aquellas especies en el vehículo.

Expresa que dentro del principio de la lógica de razón suficiente, la doctrina incluye el principio de la corroboración, que consiste en la exigencia de que dos o más pruebas autónomas han de condecirse, lo cual es necesario para dar fuerza al antecedente de imputación con nuevos datos, distintos e independientes, que apoyen la fuente de incriminación. La defensa cuestiona lo resuelto, entendiendo que si bien existe prueba que pretende inculpar a su representado no se encuentra lo suficientemente corroborada con la demás prueba de cargo, infringiéndose así el principio de la razón suficiente, el cual debe respetarse por el tribunal a la luz de lo previsto en el artículo 297 del Código Procesal Penal.

Al efecto, señala que en la audiencia de juicio oral, a pesar de que el Ministerio Público ofreció como prueba de cargo la declaración de las víctimas y de testigos, entiende que en torno las declaraciones se vulnera el mencionado principio lógico de la razón suficiente, ya que es ella la única prueba que podría evidenciar las características y dinámicas del ilícito, lo que no ocurre en el caso de marras. Sólo se señala en base a las pruebas que fundan la convicción del tribunal que se arriba a tales conclusiones, pero estas pruebas son meros indicios, que considerados individualmente no sirven de fundamento suficiente para una sentencia condenatoria y al analizarlas en conjunto, tampoco logra más allá de toda duda razonable imputar claramente cuál es la participación de don Adolfo Salinas. A pesar de lo señalado la prueba rendida por el persecutor ha sido suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia de acusado. En aquel orden de ideas, es relevante hacer presente que el Tribunal infringe el principio de corroboración, ya que las víctimas y testigos no deponen respecto a las características totales y cual es dinámica de los hechos, infiriendo en base a indicios, lo que da luces acerca de una insuficiencia probatoria no superada y una falta de corroboración entre sus dichos. Tampoco ningún testigo o víctima puede dar descripción alguna de las vestimentas del imputado. ¿Cuál sería el elemento que permitiría arribar a la conclusión de que su representado participó como ente activo en la coordinación previa, comisión del ilícito y posterior repartición?, ninguna entiende la defensa, más que la circunstancia de ser una de las personas que conducía un vehículo que fue usado como transporte o



flete, lo que da cuenta que el sentenciador para llegar a la conclusión de que quien comete el ilícito fue su defendido, se hizo mediante presunciones arbitrarias y sesgo, entendiendo que su representado por haber estado en el vehículo que transportaba era quien había ejecutado actos tendientes a la comisión del delito, lo que no es suficiente para derribar la presunción de inocencia que le favorece. Más aun teniendo en cuenta que el imputado fue detenido después de los hechos y sin especies sustraídas en el hecho punible, otra circunstancia probada que no corrobora la participación en relación a la demás probanzas tendientes a acreditar aquella.

Sostiene que no era posible acreditar la participación del imputado en los hechos de la acusación y la propuesta del Ministerio Público no logró sustentarse en medio probatorio alguno, por cuanto no fue posible acreditar que efectivamente el señor Adolfo Salinas haya sido quien se apropia de especies haciendo uso de la fuerza e intimidación, no pudiendo establecerse esta participación durante el transcurso de la audiencia del juicio oral. En síntesis y teniendo en consideración las circunstancias antes señaladas, se genera a juicio de la defensa una duda razonable de tal magnitud, que impide arribar a una decisión condenatoria, debido a la ausencia de probanzas que pudieren corroborar tal hecho y por la insuficiencia de las rendidas. En consecuencia y de acuerdo a la prueba de cargo incorporada, ha resultado insuficiente para acreditar la participación que el Ministerio Público atribuyó a su representado, teniendo particularmente en consideración lo referido en los párrafos anteriores, en cuanto a la prueba testimonial, documental y material aportada por el acusador y defensa y la errada o nula valoración realizada por el tribunal.

De las causales precedentemente expuestas fluye que, si el tribunal que dictó la sentencia no hubiere omitido realizar una exposición completa, lógica y clara en la valoración de la prueba del Ministerio Público y la Defensa, y si el tribunal no hubiera hecho una ponderación de la prueba contraria a la lógica, o no hubiera el Tribunal omitido las razones legales para la determinar la participación, entonces necesariamente habría arribado a una conclusión absolutoria respecto a esa supuesta participación de mi representado en los hechos. De lo anterior, surge que el único modo de reparar el perjuicio producido a este interviniente, en cuanto hacer efectiva la pretensión punitiva del Estado, es la anulación tanto del fallo impugnado como del juicio oral en que se pronunció a fin de hacer posible un nuevo juzgamiento con tal fin.

SEGUNDO: Que, en subsidio de la anterior, impetró la causal de nulidad prevista en las letra e) del artículo 374 del Código Procesal Penal, en



relación con el artículo 342 letra c) pues la reflexión efectuada sobre la prueba rendida en el juicio oral, para dar por establecida la participación de su defendido, no cumple con la metodología del artículo 297 del Código Procesal Penal ni con el estándar del artículo 340 del mismo cuerpo legal, lo que se traduce en que el fallo recurrido no cumple a cabalidad con los requisitos que le impone la letra c) del artículo 342 del indicado cuerpo legal.

Señala que la defensa sostuvo una teoría alternativa a la del ente persecutor, referida a la falta de participación de su representando tanto en el alegato de apertura y de clausura, pero también respecto a la comunicación del dolo y del iter críminis. La carga de la prueba era superior para el Ministerio Público y no obstante ello la prueba fue débil en varios aspectos.

Precisa que no se alegó en la apertura, pero si se realizaron preguntas conducentes a la acreditación de los requisitos subjetivos y objetivos del tipo penal y no hay un testigo que pudiese señalar con certeza que su representado participó directamente del ilícito o cómo fue su participación, más allá de seguir en una suerte de tragicomedia un camión para un lado y otro. El Ministerio Público ha actuado en base a suposiciones e indicios, ya que infiere que participar del ilícito entró porque su vehículo está posicionado en un lugar relativamente cercano a los hechos, pero totalmente alejado de los hechos en que las víctimas son abandonadas y se le sustraen las pertenencias. Las víctimas no vieron a su representado jamás y ni siquiera concuerda con la vaga descripción física. Además, se extraña el empadronamiento de otros testigos en el pasaje o en la ruta donde es abandonado el camión y se produce esta llamativa caravana. Tampoco hay cámaras de seguridad. Entonces cobra importancia, en cuanto a si su representado participó activamente en la coordinación, organización, ejecución o repartición de las especies y durante todo el juicio oral en ninguna hipótesis puede encasillarse este actuar ya que no hay testigo alguno que lo haya visto realizando estos actos, sólo indicios que no tienen el peso suficiente para lograr plena convicción.

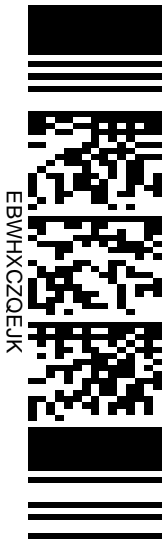
Lo razonado en la sentencia, a juicio de esta Defensa, constituye una violación al principio lógico de la razón suficiente y a la valoración de la prueba necesaria para arribar a una sentencia condenatoria, considera que la prueba rendida por el Ministerio Público fue insuficiente para derribar el estándar de duda razonable respecto de la participación de su representado y, razonablemente, no podía conducir a la convicción condenatoria que acarreo el perjuicio para su defendido. A este respecto, aduce que pareciera que este último no tiene participación como co autor sino más bien como cómplice o encubridor, situación que puede ser determinada por el tribunal. Si bien es



cierto los tribunales están facultados para apreciar la prueba con libertad (en abierta y franca discrepancia con el sistema tasado del sistema inquisitivo), concluyendo por medio de una sentencia penal que fija los hechos y circunstancia que se tuvieron por probados, independiente de si fuesen favorables o desfavorables al acusado, ésta siempre debe ir presidida por los requisitos de valoración del artículo 297 del Código Procesal Penal. En efecto los tribunales no pueden contradecir los principios de la lógica, máxima de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados.

Indica, que los hechos que configuran la causal invocada emanan del resultado que produce una reproducción incompleta y acomodaticia de la prueba producida en el juicio, como también, de la inadecuada e injustificada valoración de la prueba, la que incluso fue sopesada parcialmente por los sentenciadores. Asimismo, sostiene que la valoración de la prueba realizada por los sentenciadores contraría los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, debido a que las conclusiones arribadas en la misma son fruto de una inexacta reproducción de los dichos de los testigos, vulnerando, los sentenciadores, el principio lógico de Razón Suficiente condenando a su representado por el delito de robo en lugar habitado sin existir prueba suficiente que acredite tal calificación jurídica. Este principio rector de la Lógica Jurídica de razón suficiente, en la lógica pura, afirma que todo juicio para ser verdadero ha menester de una razón suficiente, el sentido de los principios lógicos consiste en hacer enunciaciones sobre la verdad o falsedad. En esta proposición teórica, cabe fundar la regla pedagógica según la cual no debemos admitir, sin razón suficiente, la verdad de una afirmación.

Asevera que el principio de la lógica de la razón suficiente se infringió en el presente juicio, por cuanto los sentenciadores han establecido la concreción del tipo penal, descartando la tesis absolutoria de la defensa que sostuvo en el alegato de clausura respecto al supuesto fáctico que sustenta la calificación jurídica y su respectiva pretensión punitiva del persecutor. En este orden de ideas, lo relevante durante el juicio era analizar la concurrencia del tipo penal imputado por el Ministerio Público a la luz de la prueba vertida durante el desarrollo del Juicio Oral. Esgrime que esto no se cumple, en conclusión con los elementos objetivos del tipo penal en comento y, en esta línea, la resolución condenatoria del tribunal otorga valor probatorio suficiente a la declaración de los testigos y víctimas del hecho y sustento de la acreditación de los elemento del tipo penal de marras. De la lectura y análisis de la totalidad de prueba en la sentencia, a juicio de la defensa, surgen dudas



respecto a la suficiencia de la prueba de cargo rendida por el Ministerio Público, para acreditar la fuerza que no se aprecia en el camión sustraído por tanto no se ajusta a los principios de la lógica, ya que se basa en simples suposiciones y no en afirmaciones. Así las cosas, razonablemente, el tribunal no estaba en condiciones de arribar a una convicción condenatoria por el delito, no siendo suficiente para ello la prueba rendida en el juicio. Añade que ha quedado de manifiesto a través de la prueba rendida que nadie, ninguno de los testigos o víctimas, vio al o los sujetos sujeto que sustrajeron las especies, y ejercieron la fuerza. Pues bien, haciendo un razonamiento lógico en cuanto a la suficiencia de esta prueba, nos cuestionamos lo siguiente ¿No sería más sencillo y simple entender que su representado solo transportó, que fue contratado como flete y que nunca se benefició del delito? Ante esta duda, el tribunal supone en base a conjeturas que mi representado habría sido autor. A la interrogante de si se ahondó y analizó el descarte está teoría alternativa por parte de las sentenciadoras, evidentemente podemos contestar que no. Claramente la conclusión arribada por el tribunal lo hace sobre una base extremadamente ligera, no contando con el material probatorio suficiente para avalar esa hipótesis. Considera que la prueba rendida no fue suficiente para llevar al convencimiento de que Adolfo Salinas Campos ejecutó actos tendientes a completar el tipo penal perseguido.

Refiere que no se consideró la tesis de la defensa de ser un mero cómplice, en el peor de los casos. Asimismo, las argumentaciones de los sentenciadores que estimaron que concurren los elementos del tipo penal, se centran en hipótesis construidas sobre simples suposiciones tendientes a soslayar la debilidad probatoria al respecto. La sentencia recurrida nos da cuenta de no hay certeza de la participación de su representado, no hay prueba que dé luz al respecto y nos coloca directamente en el terreno de las conjeturas, sin que se dé razón suficiente del porque se descartan las otras posibilidades de participación de todos los supuestos autores. Se hace una constante alusión a una supuesta coordinación, jamás comprobada por fiscalía durante el desarrollo del presente juicio oral, pero no se señala que dicha causa no es suficiente para acreditar una participación punible y se deja de lado la tesis de que don Adolfo fue contratado por un flete, para transportar personas al sur, en su propio auto y a rostro descubierto. Denotando aquello, que el razonamiento adoleció de debilidades relativas a la prueba rendida. Los únicos antecedentes inequívocos es que sujetos roban un camión y que sus ocupantes son trasladados en un furgón, totalmente aparte de la caravana mencionada latamente, que les sustraen pertenencias. Finalmente, una simple



apreciación subjetiva de los testigos, el tribunal la acoge y la hace suya, como la única hipótesis posible de ocurrencia de los hechos, descartando otras que, a la luz de las débiles evidencias, resultaban más lógicas y de fácil concreción.

Expresa que el Código Procesal Chileno acorde a lo descrito en los artículos antes mencionados y lo dispuesto en los artículos 1°, 4°, 5°, y 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política consagran un régimen político denominado Estado Democrático y Constitucional de Derecho y establecen la exigencia de que las decisiones judiciales deban ser justificadas. Así puede decirse que en un Estado de Derecho “no hay aplicación del derecho sin justificación, y que sólo puede mostrarse que una decisión judicial está justificada si ofrece las razones en apoyo de la misma. De aquí que la decisión de motivar las sentencias no sea únicamente legal (artículos 297 y 342 letra c y d del Código Procesal), sino que deriva de la idea misma de jurisdicción y de su ejercicio en los estados democráticos, (como el nuestro, artículo 4 y 5 de la Constitución) donde no pueden desligarse las ideas de jurisdicción y motivación” (Victoria Iturralde. “Justificación Judicial: Validez material y razones”. Revista Analisi e Diritto año 2004, página 119 y ss). Así, el Código Procesal Penal prevé en su artículo 36 el deber de los órganos jurisdiccionales de motivación de sus decisiones, al estatuir que “será obligación del tribunal fundamentar las resoluciones que dictare, con excepción de aquellas que se pronunciaren sobre cuestiones de mero trámite. La fundamentación expresará sucintamente, pero con precisión, los motivos de hecho y derecho en que se basaren las decisiones tomadas. Y en este caso las consideraciones que se sustentan en la débil prueba rendida, por las cuales finalmente se condenada, establecen una duda razonable, que a la luz de los principios de la lógica, hacen imposible alcanzar una convicción de condena, particularmente por no haberse probado bajo el estándar legal, los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal

De la causal precedentemente expuesta fluye que, si el tribunal que dictó la sentencia no hubiere omitido realizar una exposición completa, lógica y clara en la valoración de la prueba del Ministerio Público, necesariamente habría arribado a una conclusión absolutoria respecto del delito de marras al no tenerse por acreditado uno de sus elementos objetivos. De lo anterior, surge que el único modo de reparar el perjuicio producido a este interviniente, es la anulación tanto del fallo impugnado como del juicio oral en que se pronunció a fin de hacer posible un nuevo juzgamiento.

TERCERO: Que, el recurso de nulidad previsto en nuestro ordenamiento procesal penal es de derecho estricto, esto es, sólo procede



contra determinadas resoluciones judiciales y en virtud de causales taxativas previstas por el legislador, lo que importa que las resoluciones judiciales objeto del mismo, no pueden ser objeto de revisión de todas las cuestiones de hecho y de derecho controvertidas ante el tribunal a quo sino sólo de aquellas constitutivas de las causales fundantes del aludido medio de impugnación.

En cuanto a la causal esgrimida en la especie, esto es, la consagrada en el artículo 374 letra e) del Código Procesal Penal cabe señalar que, para decidir si se acoge o rechaza un recurso de nulidad que se funda en ella, debe analizarse si la sentencia impugnada adolece o no de la concurrencia de dos órdenes de requisitos: a) la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado y b) la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dichas conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297 del aludido cuerpo legal, esto es, con el estándar probatorio previsto en sede penal, cual es el sistema de la sana crítica, con las limitaciones impuestas relativas a los principios de la lógica, máximas de la experiencia y conocimientos científicamente afianzados, elementos que, a su vez, deben ser desarrollados en cada caso en particular para quedar en condiciones de analizar los términos de su procedencia.

De esta forma, el recurso de nulidad implica que los hechos establecidos por el tribunal y la valoración de los medios de probatorios en que funda su convicción, son inamovibles en esta sede jurisdiccional, por cuanto el control que ejerce la Corte dice relación con la legalidad y no como “juez de mérito”; lo revisable es la estructura racional del juicio o discurso valorativo desde la perspectiva de la lógica, máximas de la experiencia y conocimiento científicos.

CUARTO: Que, en lo que interesa al recurso, consta en el fundamento noveno del fallo impugnado, que se dieron por acreditados los hechos siguientes:

“Que, con fecha 26 de marzo de 2019, en horas de la mañana, los acusados Alejandro Agustín González Burgos, Adolfo Segundo Salinas Campos y otros sujetos, previamente concertados, salieron desde la Región Metropolitana en el vehículo marca Kía, modelo Morning, año 2013, color Rojo Signal, placa patente FHFZ86, perteneciente a María Araya Meliman; en la camioneta marca Volkswagen, modelo Amarok, placa patente JDKR-98,



color blanco, año 2017, conducida por Juan Pablo González Palma; en el automóvil marca Samsung, modelo SM7, color beige, placa patente MZ-8415, año 2007, de propiedad de Salinas Campos y conducido por él; en un vehículo marca Hyundai, modelo H1 Van SV, color plateado plata, que portaba placa patente en el vidrio trasero WF-8527 (que no corresponde a las originales) y un camión marca Mitsubishi Fuso, modelo Canter, placa patente BTTS-88, rumbo a la localidad de Nancagua, donde llegaron, alrededor de las 08:40 horas; y en el momento que las víctimas Mario Vergara Osses y José Ignacio Rivera Espinoza, chofer y ayudante del camión marca JAC, color blanco, placa patente KTVK-67, que transportaba cajas de cigarrillos de la empresa BAT Chile, se disponían a subir a dicho vehículo, luego de haber hecho entrega de mercadería en el pasaje 2, frente al número 35 de la Villa Francia, de la referida localidad, fueron abordados por algunos de estos sujetos e intimidados con armas de fuego, subiéndolos contra su voluntad a la parte posterior del furgón marca Hyundai, modelo H1 VAN SV, color plateado plata antes individualizado; sustrayéndole a Vergara Osses un celular marca Samsung, modelo J-8, de propiedad de la empresa BAT Chile, un celular marca Apple, Iphone, de la compañía Entel, un banano color negro, una billetera de cuero, color café, con documentación personal, y la suma de \$150.000, en tanto que a Rivera Espinoza le sustrajeron un celular marca HUAWEI, modelo Y9, año 2019, de la compañía WOM, luego de lo cual son amarrados de pies y manos y después de estar retenidos, alrededor de una hora y media, fueron lanzados a un sitio eriazo en la comuna de San Francisco de Mostazal.

Luego de intimidar a las víctimas, Alejandro Agustín González Burgos y otro sujeto no identificado, se suben al camión con la carga de cigarrillos tomando la ruta I-90, ruta I-82 y Nancagua, siguiéndolos el camión Mitsubishi Fuso, modelo Canter, placa patente BTTS-88, con la finalidad de realizar el cambio de la carga, asimismo le prestan cobertura Juan Pablo González Palma y Adolfo Segundo Salinas Campos en sus respectivos vehículos y también Fernando Jesús Vásquez Sandoval, circulando varios kilómetros tras el camión JAC, la camioneta Amarok, luego el camión



Mitsubishi y atrás de éste el Samsung, modelo SM7, de propiedad de Salinas Campos y conducido por él, hasta que los imputados que circulaban en el camión sustraído con cigarrillos, lo dejan atravesado y abandonado en ruta I-82 alrededor de las 09:15 horas”.

Cabe agregar que en el motivo duodécimo se reprodujo latamente la prueba de cargo rendida por el Ente Persecutor para acreditar los hechos que imputó al enjuiciado Salinas Campos Consta y en el fundamento décimonoveno, se aprecia la valoración efectuada por los sentenciadores para establecer la participación de dicho enjuiciado en el hecho reproducido en el motivo que antecede, para lo cual tuvieron en consideración las probanzas e indicios siguientes:

“Las diligencias investigativas que permitieron el esclarecimiento del hecho señalado comenzaron un tiempo antes a su ocurrencia, el 19 de marzo, pues días antes, el 22 de marzo de 2019, en Dichato, Carabineros les frustró un robo similar al perpetrado el día 26 de marzo, al realizar a Alejandro González y Fernando Vásquez un control de identidad de acuerdo al artículo 85 del Código Procesal Penal, por una llamada que efectuó el conductor del camión que se percató que lo iban siguiendo.– Hecho que fue motivo de conversación telefónica entre Alejandro y otras personas, donde lamentaban esta situación, que les impidió apropiarse de especies de gran valor, como era un cargamento de cigarrillos.– Así, el oficial investigador de la PDI, accede a conversaciones a través de las interceptaciones telefónicas al teléfono de Alejandro González terminado en 56 que lo llevan a inferir que se va a cometer un delito y que los hacen estar alertas y poner en marcha diversos mecanismos para estar informados de la actividad delictual que va a realizar.–

*En primer lugar en **los audios incorporados al efecto**, se tiene en el **1).**– de fecha 19 de marzo de 2019, que Alejandro conversa con una persona no identificada que le dice que tiene que ir a Santa Cruz a dejar el furgón H1, donde es el “choreo”(en jerga delictual, robar), pero tenía problemas con un conductor y por eso tenía que ir a dejarlo allá; audio **2).**– Alejandro habla con su pareja María Araya y le cuenta que fue detenido en*



Dichato, pero lo dejaron en libertad, no obstante andar manejando con un parte; audio **3).**– del día 22 de marzo, Alejandro conversa con una tía de Curicó y le cuenta que se iba a pitiar un humo de un cigarrero, eso es robar un camión de Chile Tabaco y se frustró; audio **4).**– conversa Alejandro con Fernando Sandoval un compañero de delito, pues ya habían cometido otros, para juntarse y conversar sobre la comisión de un nuevo delito; audio **5).**– Conversa Alejandro con Fernando que lo están esperando para ir a conversar con el caballero del delito; en los audios **6) y 7).**– Alejandro conversa con la persona que va a reparar el H1 y con la persona que conduciría el H1; audios posteriores al día 26 de marzo **8).**– Aquí, Alejandro, quien habla con un tercero, admite su participación en el ilícito porque le dice que tuvo que dejar botado un camión con 140 cajas de cigarrillos, por un problema de descoordinación porque no conocían al tipo que manejaba la camioneta Amarok pues no llegó a la reunión y participaba en la comisión del ilícito; le señala que con ese dinero pensaba pagar la casa de una.– Esta conversación es coherente con las escuchas previas, con lo que se muestra en los videos, con el uso del vehículo etc.; audio **9).**– Alejandro le cuenta a una tía de Curicó que con ese ilícito pensaba ganar 10 millones de pesos; audio **10).**– Alejandro le cuenta a Claudio Moya que tuvo que dejar botado el camión de chéptica por descoordinación y por eso tuvo problemas con el resto de la banda, que eso pasa por no ir a las reuniones; audio **11).**– misma situación, le cuenta a un tercero el problema de descoordinación que tuvo en el robo a Bat Chile, que tuvo un arma de fuego, pero ya no la tiene en su poder, lo que corrobora la intimidación que se utilizó en la comisión del referido ilícito en contra del conductor y el pioneta; audio **13).**– conversa Alejandro con Fernando de otro ilícito y también del robo a Bat Chile, donde señalan que pensaron que la camioneta Amarok era de la policía porque lo vieron con el teléfono en la oreja e iba de camisa, razón por la que dejaron botado el camión.– También conversan sobre lo ocurrido en Dichato.–

Aparte de las escuchas telefónicas, están los registros de las cámaras de vigilancia, tanto las internas del camión como las apostadas en distintos lugares, como ser calles, municipalidades, etc.– En estas



cámaras internas se escucha que cuando se suben al camión JAC de Chile Tabaco, una vez reducidos el conductor y el pioneta, se sorprenden por la presencia de cámaras, en ellas se escucha hablar a Alejandro, – a quien ya le tienen identificada la voz – , sobre dónde va el H1 con las víctimas, que no les funciona el equipo radial para comunicarse y que hay un vehículo extraño, la camioneta Amarok, que puede ser de la policía y por eso de deciden dar una vuelta para ver si los sigue y cuando corroboran el seguimiento de este vehículo, deciden dejar botado el camión con los cigarros, creen que los va siguiendo.– Por su parte, en las grabaciones de las cámaras de vigilancia, se puede apreciar, la planificación de los vehículos participantes, la coordinación exacta que había entre ellos y el recorrido que emplearon antes, durante y después de la comisión del ilícito.– En efecto, en **los videos de las grabaciones de la cámaras interiores del camión 1, 2, 3, 4 y 5**, se aprecia, la ubicación que toman los vehículos participantes en este robo, mientras el conductor y pioneta hacen entrega de la mercadería a un cliente.–El furgón Hyndai H1, se ubica delante del camión JAC con cigarrillos, mientras hacen el reparto; el camión Mitsubishi, en el cual harán el trasvasije de la mercadería que sustraerán, se ubica al fondo del pasaje en el cual está estacionado el camión JAC.– Cuando el conductor y el pioneta se dirigen al Camión JAC para subirse y salir del pasaje, se observa como los retienen y llevan al H1, mientras los imputados se suben al camión JAC, lo echan a andar y se van; en ese momento se dan cuenta que tiene cámaras y lo dicen.– Salen del pasaje en el camión JAC, seguidos por el camión Mitsubishi que los estaba esperando, adelante el H1 y se dirigen al cruce donde se encuentran el resto de los participantes, según se aprecia en las cámaras de Nancagua, Chépica.– Cuando el camión JAC gira en el cruce que va en dirección a Chépica, se ve en la ruta, la camioneta blanca Amarok y detrás el automóvil Samsung y cuando avanzan, la camioneta se coloca adelante del camión Mitsubishi.– Las personas que van dentro del camión conversan si los sigue el camión del trasvasije.– En la cámara 1 del camión se aprecia que la camioneta blanca Amarok y el auto Samsung estaban apostados al costado de la ruta, esperándolos.– En otras



cámaras se ve que el auto Samsung se encontraba estacionado en el lugar desde las 8 de la mañana, específicamente en un sitio eriazo y luego se coloca en forma paralela a la ruta cuando llega el camión JAC al lugar de entrega de la mercadería y cuando éste sale, ya sustraído, el auto estaba estacionado en dirección a Chépica a donde iban a hacer el trasvasije de las cajas de cigarrillos, o sea, el auto SM7 estuvo aparcado en tres partes, lo que demuestra que estaban perfectamente coordinados, de esto se deriva que su función era presar cobertura y ayudar en el trasvasije.- En las cámaras se aprecia que era una caravana, en primer lugar el furgón H1, seguido del camión JAC, luego la camioneta Amarok y finalmente el Samsung.- Cuando van llegando al pueblo de Chépica se percatan de la camioneta blanca que los sigue y que ellos desconocen por lo que deciden dar una vuelta para comprobar si era de ellos o no, al dar la vuelta se topan de frente con ésta y ven que el chofer habla por teléfono y va de camisa, incluso señalan meterse a un callejón para perder esa camioneta, finalmente deciden abandonar el camión cruzándolo en el camino con las llaves puestas y retornan a Santiago, todo lo cual se establece por los audios del camión, quedando en evidencia que fue un problema de descoordinación.- En cuanto a la **ubicación de los vehículos después de cometido el ilícito, también se aprecia en las fotografías 28, 29 y 34 a 60** del set de fotografías incorporado como prueba respecto de este hecho, extraídas de las cámaras de vigilancia.- En la **28** se ve el auto Samsung estacionado al costado de la ruta, después de la sustracción del camión y atrás el camión Mitsubishi Canter; en el resto de las fotos se aprecia la secuencia del seguimiento, primero el camión JAC, luego la camioneta Amarok, seguida del camión Mitsubishi y finalmente el auto Samsung. En la **foto 43**, se capta que desde las 8 de la mañana, el auto Samsung está estacionado en el sitio eriazo a la espera del movimiento de los camiones, por cuanto, una vez que ésto se produce, se instala al costado de la ruta y finalmente en dirección a Chépica, alerta, con las luces encendidas, lo que demuestra que estaba con el motor andando, según se verá más adelante; en la **44**, se divisa al camión Mitsubishi del trasvasije entrando al callejón del lugar de los hechos, el que



llegó antes que el camión JAC; 51, se ve ingresando el camión JAC al callejón y arriba se alcanza a ver el Samsung que aún está en el sitio eriazo, a las 8,43 horas; 53, al pasar el camión JAC, el Samsung se empieza a mover y en la 54, se aprecia que se ubica al costado de la ruta y el camión Mitsubishi vuelve a entrar al callejón y se ubica al fondo a las 8,44 horas; 56, el Samsung con luces encendidas, motor andando en dirección a Chépica; 58, se ve saliendo del callejón el H1 donde irían las víctimas retenidas por los sujetos, a las 8,59 horas.– Carabineros de la SIP de Santa Cruz establece algunas patentes de los vehículos participantes, extraídas de las grabaciones de las cámaras de vigilancia como la del Mitsubishi Canter, a la vez que entrega información de cuáles eran los otros vehículos participantes, una camioneta Amarok, un furgón H1 y un auto Samsung SM7.– Con estos datos se realiza el registro de las autopistas, pues la PDI utiliza en los pódicos de peajes de las autopistas, un sistema denominado la “vecindad”, que se utiliza cuando algún vehículo que les interesa y que pasa por los pódicos tiene registrado el TAC, pues en ese caso, les entrega un listado de los vehículos que pasan minutos antes o minutos después de aquél que tienen la patente, pueden ser muchos vehículos, por lo que ellos colocan un rango de tiempo.– Así se consultó el Mitsubishi cuya patente habían recabado los carabineros de la SIP de Santa Cruz y también la del vehículo Kia Morning que Alejandro utilizaba en los ilícitos teniendo presente además que contaban con los modelos que los otros vehículos participantes.– Así establecen que el Kía Morning ingresa a la Región Metropolitana el día 26 de marzo de 2019, a las 11,07 y al revisar, según la vecindad, los minutos antes y después de éste, se tiene que el Samsung SM7, ingresa a las 11.08, cuya patente era MZ 8415 y el propietario era Adolfo Salinas Campos.– Al considerar los 10 minutos antes del tránsito por el pódico del Kía, se estableció que a las 10,59 horas, ingresó la camioneta Volkswagen Amarok, color blanco, obteniéndose su patente que se empieza a investigar.– El camión Mitsubishi ingresa a la Región Metropolitana a las 11,24 horas y a la misma hora lo hace el furgón Hyundai H1, a las 11,24 horas.– Estos datos son corroborados con lo que les aporta, posteriormente, carabineros de la



SIP al revisar las cámaras incautadas, donde obtiene las patentes del Mitsubishi y del Samsung.- Con estos datos realizan un cuadro resumen de entrada y salida de los vehículos, desde y hacia Santiago, el día 26 de marzo de 2019.- El Kía Morning sale de Santiago a las 06.02 horas y ningún otro sale a esa hora.- Se verifica el Amarok el que pasa por los pórticos a las 5.31 y a la misma hora, es decir a las 5,31 sale el Samsung.- Se averigua que el H1 sale el día 25 de marzo a las 18,36 horas.- Con estos antecedentes averiguan quienes eran los ocupantes de los vehículos identificados, pues en Angostura, en esa época, había cámaras que estaban dirigidas directamente a la parte frontal de los móviles.- Así se establece que el conductor del Samsung SM7, era Adolfo Salinas Campos, pues su imagen se compara con el sistema biométrico, resultando ser el mismo quien conducía y además, era la persona a nombre de quien estaba registrado el TAC.- En el Kía Morning de la pareja de Alejandro González Burgos iba como conductor Fernando Vásquez Sandoval y de copiloto un pariente, no se distinguió quien iba en el asiento trasero.- El camión Mitsubishi estaba a nombre de José Zapata, la camioneta Amarok estaba registrada a nombre Juan Pablo González Palma y el H1 a nombre de Juan, a quien no ubicaron en su domicilio.- El camión Mitsubishi tampoco fue habido.- A continuación se trabaja con los números telefónicos investigados para obtener el tráfico de llamadas, tanto de Alejandro González, como Adolfo salinas Campos y Juan Pablo González Palma, quien era el conductor de la Amarok, todo lo cual aparece en las imágenes correspondientes a los pasos por los pórticos de Angostura, tales como en el **1, 2, 3, 4 y 5 referidas al Kía Morning y su conductor Fernando Vásquez Sandoval** y las comparativas con el sistema biométrico en las cuales se identifica que se trata de Vásquez Sandoval.- Misma operación se hace en las imágenes **1, 2, 3 y 4, referidas al acusado Salinas Campos**, estableciéndose que era él, el conductor de su vehículo el Samsung MS7.- Lo mismo acontece respecto del conductor de la camioneta Amarok estableciéndose que el conductor era Juan Pablo González Palma, lo que se aprecia en las imágenes del **1 a la 10** respecto a este sujeto.-



Otro elemento de convicción respecto a la participación de los acusados Alejandro González Burgos y Adolfo Salinas Campos son **las conexiones de antenas telefónicas de los teléfonos de estos acusados**, terminados en 56 Alejandro, en 70 Adolfo, Fernando en 98 y en 43 Juan Pablo González.– Los números de teléfonos de Alejandro González y Adolfo Salinas Campos registraban conexión de antenas en Chépica, Fernando en Nancagua y Juan Pablo González en Santa Cruz, entre las 9 y 9,30 horas, del día 26 de marzo de 2019, justo después de la sustracción del camión que fue alrededor de las 9 horas, lo que se coordinan con la oficina de análisis de la PDI, la que confecciona un mapeo de las antenas en un plano donde se grafican las antenas y el ángulo de apertura que indica específicamente el lugar donde se encuentra, lo que apunta al lugar de ocurrencia del hecho en estudio.– Así en estos cuadros confeccionados por la referida oficina se tiene: **1).**– que Alejandro González marca antena a las 9,25 horas en la comuna de Chépica; **3).**– a las 9,28 registra conexión de antena Adolfo Salinas Campos en Chépica; **4).**– grafica la secuencia de llamados que tuvo Adolfo Salinas Campos el día 26 de marzo de 2019, a partir de las 7 de la mañana hasta las 9,28 cuando ya estaba en Chépica, en la Sexta Región.– La primera llamada marca en Paine a las 5,30 horas, coherente con la hora en que pasa por el pórtico de Angostura. En cuanto a Fernando Vásquez Sandoval quien conducía el Kía Morning de Alejandro González y compañero de delito de éste, marca antena a las 8,59 horas, en Nancagua cercano al lugar de los hechos.– En el mismo sentido, declara el testigo **Juan Carlos Orellana Molina**, quien refiere que el teléfono de Alejandro González Burgos terminado en 56 registra conexión de antena en Chépica a las 9,25 horas.– El de Adolfo Salinas Campos, terminado en 7070 de la compañía Movistar, mantiene conexión de antena telefónica ubicada en Chépica a las 9.28 horas.–

También resulta útil para acreditar la participación de Salinas Campos y González Burgos, en el hecho perpetrado el 26 de marzo de 2019, la coordinación y planificación que había entre ellos y los otros acusados para la comisión de este ilícito, lo que quedó claro de lo expuesto por el



testigo Damián Antonio González Peña, quien además explicó ls 121 fotografías que fueron obtenidas de las grabaciones obtenidas de las distintas cámaras que fueron captando las distintas etapas de este hecho.-

Con estos antecedentes se desvirtúa la declaración prestada por Adolfo Salinas Campos, en cuanto a que a él lo contrataron para una carrera en su vehículo al Sur, declaración ambigua por cuanto no sabe para donde era la carrera, a qué hora tenían que estar, ni el nombre de quien lo contrató porque dijo que no lo conocía, que solo sabe que le dicen Chino y que le iban a pagar algo de 150.000 pesos; que en San Bernardo se subieron 3 personas, que no sabe lo que éstas conversaban y que luego en el camino, lo hicieron detenerse y que las personas se subieron a una camioneta que estaba esperándolos; que después escuchó algo de un robo y ahí él se devolvió y que como lo intimidaron, el reanudó la marcha con ellos, pero luego se devolvió a Santiago, sin importarle que lo agredieran porque vio que era algo turbio.-

Esta versión queda totalmente desacreditada con la prueba antes relacionada de la cual se colige que él formaba parte de las personas que iban a asaltar el camión JAC de Chile Tabaco, pues estaban perfectamente coordinados, lo que se evidencia de las ubicaciones que él tenía, de los tiempos en los cuales estuvo en determinados lugares, estacionados en algunos y en marcha en otros; la hora en la que llegó al sitio eriazo donde permaneció bastante tiempo a la espera del camión JAC, perfectamente coordinado con el resto, a fin de que todo se cumpliera a cabalidad a fin de lograr su cometido que era la sustracción de las cajas de cigarros.- También el posicionamiento de este acusado en el lugar de los hechos, lo cual queda establecido de la conexión de antenas, resulta relevante para establecer su participación como también los pasos tanto de entrada y salida por los pórticos de la autopista central que dan cuenta que él salió conjuntamente con el resto desde la Región Metropolitana, perfectamente coordinados con el resto de los vehículos participantes, de todo lo cual evidencia que el intervino en la consecución de los hechos cumpliendo funciones específicas.- También se desvirtúa su aseveración de que solo una vez se detuvo, pues en



los videos de las cámaras de vigilancia se puede apreciar que a los menos en tres oportunidades estuvo detenido.–

QUINTO: Que, de la lectura de los fundamentos duodécimo y décimonoveno de la sentencia recurrida, se aprecia que el tribunal analizó cada uno de los elementos de prueba presentados a juicio, de manera armónica y coherente, lo que permitió despejar la duda razonable y tener por acreditado el hecho punible y la participación que le cupo al acusado en el mismo. Además, se dieron las razones que se tuvieron en cuenta para desestimar la teoría de la defensa y las explicaciones dadas por el enjuiciado al prestar declaración en el juicio.

Del análisis probatorio, se advierte que el tribunal fue concatenando cada uno de los elementos de prueba e indicios de la investigación, pudiendo establecer la cronología de los sucesos, desde el concierto en Santiago y el viaje hasta el lugar de los hechos, pudiendo comprobar que los vehículos involucrados se movilizaron en una especie de caravana, conforme al paso que tuvieron por los distintos pórticos pagados con dispositivo TAG, y lo que se pudo apreciar por los jueces en las diferentes grabaciones de cámaras municipales y otras, recopiladas por la Policía; además, existieron coordinaciones telefónicas, pues se determinaron los llamados en una mismo momento y lugar, gracias a la georeferenciación de los números telefónicos. De esta forma, tales probanzas e indicios fueron consideradas suficientes por el Tribunal para acreditar la participación del enjuiciado; lo que esta Corte comparte. En consecuencia, la falta de reconocimiento por parte de los ofendidos, no tiene relevancia a la luz de las demás probanzas rendidas y valoradas por el tribunal.

En efecto, conforme al análisis de las pruebas y fundamentos dados por los sentenciadores, reproducidos en el motivo que precede, no se percibe una valoración parcial de los medios probatorios, sino que de manera total, conjunta y coherente. Además, el análisis que se efectuó de la prueba rendida, importa la concreción de un “argumento cadena”, como se conoce también a la regla del silogismo hipotético, lo que lleva a una conclusión unívoca e inequívoca respecto de los hechos e intervención que le cupo en ellos al sentenciado.

De lo antes razonado, se colige que las consideraciones y conclusiones del tribunal se realizaron de manera armónica y contextualizada, cumpliendo con la exigencia establecida en el artículo 297 del Código Procesal Penal, pues el sentenciador valoró la prueba y dio cabal cumplimiento al requisito de



fundabilidad, dando razón suficiente de su decisión y condena, por lo que es dable concluir que no se ha vulnerado el principio de la lógica de razón suficiente y de corroboración, que se esgrime por la defensa.

Por último, de los fundamentos expuestos en el arbitrio se desprende que lo que realmente se critica al tribunal, no es una falta de fundamentación en la sentencia recurrida, sino que no se comparte lo decidido por el tribunal, situación que no se condice con un recurso de derecho estricto, como lo es el de nulidad.

SEXTO: Que, de igual forma se desestimaré la causal de nulidad impetrada de manera subsidiaria, puesto que también se sustenta en una infracción a las reglas sobre valoración de la prueba y, como ya se dijo, el tribunal se ajustó a derecho y a los hechos en el análisis que efectuó, sin que se vislumbre ninguna infracción a las reglas de la lógica que reprocha el recurrente.

SEPTIMO: Que, en consecuencia, corresponde desestimar el recurso interpuesto y concluir que la sentencia impugnada no es nula.

Por las consideraciones, normas citadas y de acuerdo, además, con lo dispuesto en los artículos 297, 340, 342, 352, 358, 360, 372, 373 letra b), 374 letra e), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **SE RECHAZA**, sin costas, el recurso de nulidad interpuesto por el Defensor Penal Privado don Patricio Agustín Ramírez Méndez, en representación de Adolfo Segundo Salinas Campos, en contra de la sentencia definitiva pronunciada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talca, en causa RIT N°293-2021, el día 26 de septiembre de 2022 y, en consecuencia, se declara que dicha sentencia no es nula.

Regístrese, notifíquese y comuníquese.

Se deja constancia que no firma a pesar de haber concurrido a la vista de la causa, el abogado integrante don Robert Morrison Munro, por encontrarse ausente.

Redacción de la Ministra Titular doña Jeannette Valdés Suazo.

Rol N°1272-2022/Penal.



Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Talca integrada por los Ministros (as) Jeannette Scarlett Valdés S., Blanca Rojas A. Talca, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós.

En Talca, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

